



NUE 193-A-2018 (AC)
Cañas Colorado contra Administración Nacional
de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las catorce horas con diez minutos del trece de septiembre de dos mil diecinueve.

1. Descripción del caso

El presente procedimiento de apelación ha sido promovido por **Efraín Alfonso Cañas Colorado**, en adelante el apelante, en contra de la resolución emitida por la entonces Oficial de Información de la **Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)**, el 11 de septiembre del año 2018, referencia: IP/115-14-2018, sobre la información consistente en:

“1) Informe sobre la carencia del suministro de agua potable en el casco urbano de Santo Tomás durante los meses de julio y agosto del presente año, así como la irregularidad del servicio durante todo el 2018 y los avisos dirigidos a la ciudadanía para su adecuado abastecimiento.

2) Planos de abastecimiento del suministro de agua potable de todo el Municipio de Santo Tomás.

3) Detalle de la racionalización del agua por motivo, horario, período y zona del Municipio de Santo Tomás”.

Por su parte, la entonces oficial de información de **ANDA** resolvió “1) Concédase el Derecho de Acceso a la Información Pública dentro del plazo establecido en la LAIP; 2) Entréguese al solicitante la información requerida gestionada bajo el número de referencia 115-14-2018 por medio del presente informe oficial que consta de un folio”.

Al respecto, el apelante manifestó que la información que recibió vía electrónica se compone únicamente de la resolución de la oficial de información y el acta de entrega, a



pesar que el texto de la resolución en el romano IV expresa que: “En atención a lo solicitado, el Jefe del Departamento de Operaciones Región Central de **ANDA**, manifestó que en virtud de la información solicitada se proporciona el siguiente detalle de información en documentos anexos: **a)** funcionamiento año 2016 (anexo 1); **b)** funcionamiento año 2017-julio 2018 (anexo 2); **c)** funcionamiento a partir de agosto 2018 (en prueba) (anexo 3); sin embargo, el apelante expresa que no recibió esta información, y que además no es la que solicitó. Por tanto requirió que se haga entrega de la documentación solicitada.

El Instituto admitió la apelación y designó al Comisionado Max Fernando Mirón Alfaro para instruir el procedimiento y elaborar un proyecto de resolución. Sin embargo, al haber finalizado su período de funciones se reasignó el caso al licenciado **José Alirio Cornejo Najarro**, nombrado por el Presidente de República como Comisionado Propietario por las Asociaciones Profesionales debidamente inscritas, mediante Acuerdo Ejecutivo N° 104 de fecha 20 de febrero de este año.

El 23 de noviembre del 2018, en audiencia de avenimiento, las representantes de **ANDA** realizaron entrega de información, que constaba cuarenta y cuatro folios útiles, acto seguido el apelante manifestó que revisaría la documentación entregada, ante ello se le otorgó un plazo para mostrar su postura al respecto, así pues, el 29 de noviembre del 2018, remitió escrito manifestando su inconformidad con la información presentada por **ANDA**, porque no se le entrega la información puntual solicitada.

En el informe justificativo de ley, el entonces presidente de **ANDA**, Felipe Alexander Rivas Villatoro, ratificó lo resuelto por la oficial de información. Dicho informe en lo medular, expone lo siguiente: según el informe emitido por el arquitecto Frederick Benítez, Director Región Central, el suministro de agua potable irregular en dicho municipio se debe a la limitada disponibilidad del recurso hídrico para la distribución, ya que de la misma fuente de agua potable se abastece a los municipios de Santo Tomás, Santiago Texacuangos, San Francisco Chinameca, Olocuilta y San Marcos.

En la audiencia oral, las apoderadas del ente obligado presentaron ampliación del punto relacionado a los motivos, horarios o períodos por los cuales se ha racionalizado el servicio de agua potable en la zona, proporcionando un plano de abastecimiento del

suministro de agua, otorgado por la Dirección de la Región Central de **ANDA**, a lo cual se le corrió traslado al apelante Cañas Colorado a efecto de pronunciarse al respecto, manifestando su inconformidad, en razón que no es la información requerida relativo a los planos de abastecimiento de agua potable en el Municipio de Santo Tomás. Durante el desarrollo de la audiencia el apelante enfatizó, la necesidad de brindar una explicación a los habitantes del municipio los motivos porque se está racionalizando el suministro de agua potable por parte de **ANDA**, los planos de abastecimiento de agua y las zonas del municipio que se verán afectadas por la falta de agua detallando el período, horario y los motivos. Las apoderadas del ente obligado ratificaron lo expuesto en el informe justificativo, emitiendo una respuesta a cada requerimiento realizado por el apelante en su solicitud de acceso a la información.

2. Análisis del caso

El análisis jurídico del caso seguirá el orden lógico siguiente: **(I)** Principio de máxima publicidad y sus efectos; **(II)** el análisis del caso en torno a la información solicitada, con base a la documentación entregada y consideraciones finales.

I. El principio de máxima divulgación ha sido reconocido en el sistema interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir información contenido en el artículo 13 de la Convención Americana. En este sentido, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han establecido que el derecho de acceso a la información debe estar regido por el “principio de máxima divulgación”¹. Asimismo, el numeral 1 de la resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto solo a un régimen limitado de excepciones”².

¹ Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 93; Corte I.D.H., Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Párr. 230.

² CJI/RES. 147 (LXXIII-O/08), Principios sobre el derecho de acceso a la información, 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 7. Disponible en: http://www.oas.org/cji/CJI_RES_147_LXXIII_O_08.p



El Art. 4 letra “a” de la LAIP, establece el principio de máxima publicidad como rector del acceso a la información pública, el cual demanda que la información en poder de los entes obligados es pública y accesible y sometida a un régimen limitado de excepciones. En ese orden de ideas, para garantizar dicho principio y el de disponibilidad, la LAIP configuró un procedimiento sencillo y expedito que facilite el acceso de la información pública a toda persona.

Asimismo, la CIDH, se ha manifestado sobre el principio de máxima publicidad, en el sentido que: “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, de manera que toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”³.

También, se puede interpretar que los tres efectos del principio de máxima publicidad frente a la información que produzca, administra o se encuentra en poder de los entes obligados⁴, son que: a) el derecho de acceso es la regla y el secreto es la excepción⁵; b) la carga probatoria para justificar cualquier negativa de acceso a la información debe recaer al órgano que fue solicitada⁶; y, c) preeminencia del derecho de acceso a la información en caso de conflictos de normas o faltas de regulación⁷.

II. Para el caso en comento, **ANDA** manifestó entregar la información consistente en:
1. “informe sobre la carencia del suministro de agua potable en el casco urbano de Santo Tomás durante los meses de julio y agosto del presente año, así como la irregularidad del servicio durante todo el 2018 y los avisos dirigidos a la ciudadanía para su adecuado abastecimiento”.

Para pronunciarnos respecto a la publicidad de la información solicitada se realizará el análisis del primer requerimiento de información bajo el siguiente orden: i) **informe sobre**

³ CIDH- Caso Gomes Lund y otros Vs. Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C, N° 219, párrafo 230.

⁴ El Art. 7 de la LAIP, contiene quienes son los entes obligados a la mencionada ley.

⁵ Relatoría especial para la libertad de expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “El Derecho de Acceso a la Información en el marco jurídico interamericano, segunda edición. 2012.

⁶ Ídem

⁷ Ídem

la **carencia del suministro de agua potable**; y ii) sobre los **avisos dirigidos a la ciudadanía** para el adecuado abastecimiento del agua.

i) Al verificar la respuesta otorgada por ANDA, respecto del **“informe sobre la carencia del suministro de agua potable** en el casco urbano de Santo Tomás durante los meses de julio y agosto del 2018, así como la **irregularidad del servicio durante todo el 2018”**, se observa que esta solamente consistió en siete líneas del memorándum enviado a la oficial de información de parte del Departamento de Operaciones, en el que no se hace referencia alguna a dicha documentación.

De lo establecido anteriormente, este Instituto estima pertinente realizar ciertas consideraciones, con el fin de delimitar el objeto de controversia en el presente requerimiento. Para ello, resulta necesario hacer una breve mención sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP) y el Derecho de Petición y Respuesta.

En lo correspondiente al DAIP, el Art. 2 de la LAIP establece que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de los entes obligados, es decir que, al tenor de la citada disposición, para ejercer este derecho es necesario que **la información exista, haya sido generada, administrada, se encuentre en poder del ente obligado al que ha sido solicitada o que exista un mandato normativo de generarla.**

Por otro lado, el derecho de petición y respuesta se encuentra contemplado en el Art. 18 de la Constitución de la República, dicha disposición establece lo siguiente: “toda persona tiene derecho a dirigir sus peticiones por escrito, de manera decorosa, a las autoridades legalmente establecidas, a que se le resuelvan y a que se le haga saber lo resuelto”. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias de fechas 5-I-2009 y 14-XII-2007, Amparos 668-2006 y 705-2006, respectivamente, sostuvo que “el ejercicio de ese derecho, se exige a los funcionarios que respondan a las solicitudes que se les planteen y que dicha contestación no se limite a dejar constancia de haberse recibido la petición. En ese sentido, la autoridad ante la cual se formule una petición debe responderla conforme a sus facultades legales y en forma motivada y congruente, haciéndole saber al interesado su



contenido. Ello, vale aclarar, no significa que tal resolución deba ser favorable a lo pedido, sino solamente que se dé la correspondiente respuesta”.

En consecuencia, por medio del derecho de petición, **se pueden exigir explicaciones** sobre el quehacer de la administración pública, ejercer derechos, interponer quejas, etc., es decir, que su finalidad no es propiamente la de resolver sobre el suministro de información pública tangible y con soporte documental –como lo hace el DAIP– sino que su exigencia es responder por escrito; es decir, generar una respuesta razonada y legal a los planteamientos de quien ejerce su derecho.

Por lo tanto, con base al artículo 102 de la LAIP, 22 y 277 del Código Procesal Civil y Mercantil es oportuno declarar la improponibilidad sobre esa parte del primer requerimiento, debido a que se ha advertido la falta de un presupuesto material, es decir se concluye que la parte inicial del primer requerimiento del recurso de apelación se configura dentro del Derecho de Petición y Respuesta, pues su finalidad no es el acceso a información de carácter público, bajo los parámetros del Art. 6 letra “c” de la LAIP; **sino que busca generar una respuesta por parte de la Administración Pública.**

ii) Respecto de la información relativa a: “**los avisos dirigidos a la ciudadanía para el adecuado abastecimiento del agua**”.

Es claro que debe existir una comunicación constante entre **ANDA** y los ciudadanos acerca de la racionalización del servicio de agua, por lo que en consecuencia debe existir una labor de informar a la ciudadanía no solo a través de redes sociales, pues no todas las personas tienen acceso a estas, sino a través de comunicados o boletines sobre la interrupción de dicho servicio, previa a que esta se desarrolle en caso se encuentre programada y sobretodo tratándose de un recurso indispensable para las actividades diarias de las personas.

Aunado a lo anterior, en el portal web de **ANDA**⁸, puede verificarse que se publica periódicamente las interrupciones del servicio de agua por municipios o zonas según sea el

⁸ <http://www.anda.gob.sv/>

caso, a través de noticias o comunicados en la sección de avisos, por lo que la información solicitada existe en los términos requeridos por el apelante; y por ende, debe entregarse.

2. Con relación a los planos de abastecimiento del suministro de agua potable de todo el Municipio de Santo Tomás, requerido por el apelante, se entregó un plano de “áreas de cobertura municipio de Santo Tomás, San Salvador”, pero ese plano está compuesto de simbología relacionada al área geográfica, así como la ubicación de tanques, plantas de bombeo, rebombeo, y tanques ubicados en la jurisdicción del Municipio de Santo Tomás.

Sin embargo, **dicha documentación no proporciona el detalle de la red de tuberías existente en el municipio donde se conduce el agua potable hasta los barrios, colonias y residenciales de Santo Tomás.** Cabe mencionar, que en el informe de ley rendido por el entonces Presidente de ANDA, se anexó “certificación del acuerdo 4.4.1 del Acta número SEIS, del Libro número Dos, correspondiente a la Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno”, relativa a desclasificar el índice de información reservada, el cual en su punto V literalmente dice: “considerando lo presentado por la Oficial de Información de la ANDA, el señor Presidente de la Institución informa que ha realizado las consultas correspondientes al Licenciado Marco Enrique Rodríguez, Secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República, con el fin de determinar si es conveniente o no desclasificar el acápite relacionado a toda la información sobre la red de agua potable: llegando a la conclusión que es viable su desclasificación (...)”.

En el mismo informe justificativo, el titular de la autónoma, relaciona que el índice de información reservada existe un acápite llamado “Protocolos y planes de operaciones de seguridad de ANDA a nivel nacional” donde se encuentran los planos de catastro de la red de tuberías, justificando su reserva en virtud del Art. 19 letra “d” de la LAIP, por ser información que pone en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona.

Vale la pena destacar, que este Instituto confrontó el índice de información reservada publicado en el portal de transparencia de ANDA, con el índice remitido en el informe justificativo de esta apelación, concluyendo que son los mismos; por ello, el argumento del Presidente de ANDA que el sistema de red de tuberías es información reservada, carece de



fundamento lógico pues ya fue desclasificado, por lo que se ordena a **ANDA** que entregue la información en los términos requeridos por **Cañas Colorado**. Aclarando que lo requerido por este, no se refiere a los puntos de entronque objeto de controversia del procedimiento de apelación NUE 28-A-2013 y en el cual se confirmó la reserva de la información.

3. Respecto de la información relativa “al detalle de la racionalización del agua por motivo, horario, período y zona del Municipio de Santo Tomás”, el apelante manifestó su inconformidad con la documentación entregada por **ANDA**, porque “únicamente se entrega un cuadro con horarios de carácter rotativo el cual no define periodicidad ni referencias”.

Al respecto este Instituto confrontó la petición del apelante con la respuesta otorgada por **ANDA**, valorando si satisfacía materialmente lo requerido, estableciendo lo siguiente:

a) Se detallan los motivos de la racionalización de servicio de agua en el Municipio de Santo Tomás.

b) Se brinda la franja horaria donde se estará suministrando agua.

c) Quedan establecidos los periodos de racionalización del suministro de agua, desde enero 2018 hasta julio 2018 y de agosto 2018 hasta la fecha.

d) Están detalladas las zonas, sectores, cantones, barrios y colonias del Municipio de Santo Tomás que son abastecidos del servicio de agua de forma racionalizada.

Con base en lo anterior, resulta clara la respuesta otorgada por **ANDA**, estando acorde a lo solicitado por el apelante, por ello es factible, sobreseer sobre este requerimiento en particular, por las razones antes expuestas.

3. Decisión del caso

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y con base a los Artículos 94, 96 letra “d” y 102 de la LAIP, este Instituto **resuelve**:

a) Declarar la improponibilidad sobrevenida del recurso de apelación relacionado el requerimiento de: “Informe sobre la carencia del suministro de agua potable en el casco urbano de Santo Tomás durante los meses de julio y agosto del presente año, así como la

irregularidad del servicio durante todo el 2018”, por los motivos expuestos en el romano II punto I de esta resolución, por ser derecho de Petición y Respuesta, debiendo a tenerse a las normas de la Ley de Procedimientos Administrativos.

b) Revocar la resolución emitida por la oficial de información de la **Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados**, de fecha 11 de septiembre de 2018, que denegó el acceso a la información relativa a: “**1)** Los avisos dirigidos a la ciudadanía para su adecuado abastecimiento; y, **2)** Planos de abastecimiento del suministro de agua potable de todo el Municipio de Santo Tomás”.

c) Sobreseer a la **Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados**, en relación al requerimiento de información consistente en: “Detalle de la racionalización del agua por motivo, horario, período y zona del Municipio de Santo Tomás”, por emitir respuesta idónea acorde a lo solicitado por el apelante.

d) Ordenar a la **Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados** que a través de su oficial de información, dentro del plazo de **cinco días hábiles** contados a partir del siguiente a la notificación de esta resolución, proporcione a **Efraín Alfonso Cañas Colorado** la información relativa a: “**1)** Los avisos dirigidos a la ciudadanía para su adecuado abastecimiento; y, **2)** Planos de abastecimiento del suministro de agua potable de todo el Municipio de Santo Tomás”, por ser información pública. En los términos establecidos en la presente resolución.

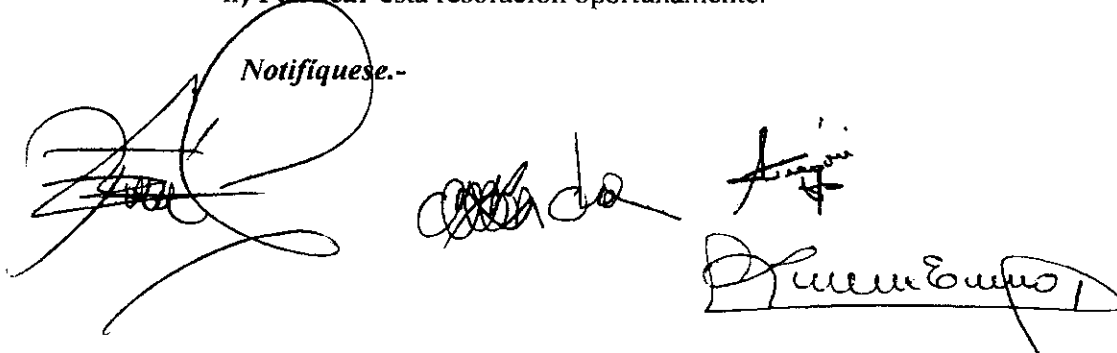
e) Ordenar a la **Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados** que dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento del plazo anterior, remita a este Instituto un informe de cumplimiento de la obligación contenida en la letra d) de esta parte resolutive, el cual incluya un acta en la que conste la documentación entregada al apelante, así como su recepción; bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Este informe puede ser remitido vía electrónica a la dirección: **oficialreceptor@iaip.gob.sv**.

f) Hace saber a las partes que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, dejando expedito el derecho de acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativo, si así se considerase necesario.

g) Remitir el presente expediente a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto para verificar la eficacia de esta resolución.

h) Publicar esta resolución oportunamente.

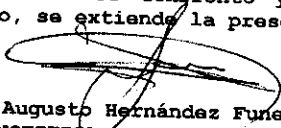
Notifíquese.-



PRONUNCIADO POR LAS COMISIONADAS Y COMSIONADOS QUE LA SUSCRIBEN.

JV/RV/CC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los dieciséis días del mes de septiembre de dos mil diecinueve.



José Augusto Hernández Funes
NOTIFICADOR INTERINO
IAIP

